
Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI (Reparto)
Ciudad

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

DEMANDANTE: VICTOR EDUARDO MONTERROZA VERDECIA y
ANGELA MARIA ZAPATA ZAPATA.

DEMANDADOS: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

CAROLINA ZAPATA BELTRAN mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía 1.130.588.229 de Cali - Valle, domiciliada en la ciudad de Cali, abogada titulada y en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional No. 236.047 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial del Señor **VICTOR EDUARDO MONTERROZA VERDECIA y ANGELA MARIA ZAPATA ZAPATA**, identificados con la cédula de ciudadanía N.º 1,.104.521.521 y 25.389.936, quienes actúan en representación de su menor hija **BRIANNA SOFIA MONTERROZA ZAPATA**, conforme al poder adjunto, comedidamente acudo ante el Despacho a su digno cargo con de presentar demanda de Reparación Directa en contra del **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP**, representada legalmente por Fulvio Leonardo Soto, o quien hagan sus veces, con la finalidad de solicitar los daños materiales y morales derivados de las lesiones padecidas por la menor **BRIANNA SOFIA MONTERROZA ZAPATA**, con ocasión de la descarga eléctrica sufrida el 16 de diciembre de 2021, por negligencia, descuido en las instalaciones eléctricas y falta de mantenimiento adecuado en el poste que causo la referida descarga.

CAPÍTULO I. DECLARACIONES Y CONDENAS

1. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad demandada, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de las lesiones personales ocasionadas a la **BRIANNA SOFIA MONTERROZA ZAPATA** por la descarga eléctrica propinada por las redes que hacen parte de la estructura eléctrica de **EMCALI EICE ESP** y se encontraban ubicadas a poca distancia de la residencia de la lesionada.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, y atendiendo los criterios del Consejo de Estado¹ frente a la indemnización, se condene a la entidad demandada, a pagar a la parte demandante las siguientes sumas de dinero:
3. -Por perjuicios morales: El equivalente a 40 s.m.l.m.v. para la víctima directa, y 40 s.m.l.m.v., para cada uno de los otros demandantes.
 - Por daño a la salud: La suma equivalente a 40 s.m.l.m.v., para la lesionada.
 - Por perjuicios materiales: Para la víctima directa, el valor de \$500.000 por concepto de daño emergente consistente en los gastos en que incurrió la parte demandante en los traslados de la menor a las instituciones clínicas y demás gastos de transporte por citas posteriores.

¹ El Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mérida Valle de De la Hoz

4. Que se ordene a la entidad accionada, indexar los valores resultantes de la respectiva sentencia, acorde con lo preceptuado por el artículo 187 del CPACA.
5. Que se ordene a la entidad demandada, cancelar los gastos y costas procesales, así como las agencias en derecho.

CAPITULO II

HECHOS FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DEMANDA.

Los hechos que sirven de fundamento al presente Medio de Control, según lo narrado por mis poderdantes, en síntesis, son los siguientes:

- 1.- El 16 de diciembre de 2021, siendo las 6:00 pm cuando la madre de la menor Brianna Sofia Monterroza Zapata, regresaba de su trabajo, fue a recoger a su hija al lugar donde la cuidan, luego de recibirla un momento antes de dirigirse a la residencia en la Cra 28D2 No 72Y-12 del barrio el Poblado, mientras descargaba el bolso para abrir la puerta de la casa de residencia la niña apenas se apoyó en el poste del alumbrado público identificado con el número 2158370, ubicado al frente del parque longitudinal del barrio Poblado II, acción que le generó una descarga eléctrica que le causó afectaciones físicas y psicológicas.
2. una vez se produce el suceso el mismo día 16 de septiembre de 2021 siendo aproximadamente las 6:00 pm, se llevó de urgencia al Hospital Carlos Holmes Trujillo, institución clínica que realizó diagnóstico: "Quemaduras de primer grado en la muñeca y la mano, laceración de piel de 3 dedos de la mano izquierda. De dicho diagnóstico se aporta copia de la respectiva historia clínica con sus anexos.
3. En el lugar del evento no existía ningún tipo de señal de alarma o peligro que pudiera haber sido una medida de prevención frente al riesgo inminente que tal situación producía, por el contrario una vez se provoca el accidente con la menor, por iniciativa de la comunidad se decide forrar con papel la parte inferior del poste que causaba las descargas con el ánimo de proteger a otros ciudadanos que desprevenidamente se pudieran arrimar a dicho poste tal, como ocurrió con la menor.
4. El mismo día del suceso se intentó llamar por parte de los vecinos del lugar a EMCALI EICE ESP con el ánimo de que se hicieran cargo de la situación y remediaran técnicamente el desperfecto que estaba provocando las descargas en dicho poste, lo cual no se logró si no hasta que la Policía Nacional a través de los agentes que se hicieron presentes en el lugar y luego de mucho intentar lograron comunicación con la entidad y rato después llegaron para verificar lo acontecido.
5. El día 16 de diciembre de 2021 no pudieron superar el problema técnico y regresaron al siguiente día 17 de diciembre de 2021, en el vehículo identificado GUM 687 y realizaron las maniobras y arreglos técnicos respectivos, lo cual se encuentra debidamente documentado a través de videos realizados por los padres de Brianna Sofia Monterroza Zapata.

6. fueron muchos los días en que se hizo necesario encargarse de la salud de la menor, tal como aparece documentado con la respectiva historia clínica, situación que a todas luces genera incertidumbre, stress y angustia en los que tienen un vínculo cercano con la lesionada.

7. En ese mismo sentido fue necesario acudir a citas psicológicas en consideración al impacto emocional que sufrió la menor al enfrentarse a la angustia, el dolor físico y psíquico sufrido.

CAPITULO III

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La parte demandante expone como fundamentos de derecho de la demanda, los artículos 1, 2, 11, 12, 16 y 90 de la Constitución Política, 86 y siguientes del CPACA y 1613 y 2341 del Código Civil.

El Consejo de Estado ha reconocido reiteradamente, que el transporte de energía y el uso de la estructura mediante el cual éste se desarrolla, es una actividad peligrosa, por manera que, el análisis de imputación debe realizarse a partir del título jurídico del riesgo excepcional, toda vez que el daño producido es el resultado de la materialización del desbordamiento de los estándares del riesgo permitido, ya que el daño se produce por el rompimiento de las cargas públicas en la medida que la persona o personas afectadas, son sometidas a un riesgo anormal y excepcional diferente al que deben tolerar en el diario vivir.

Sobre el régimen de imputación de responsabilidad en los casos de daños causados por la conducción de redes eléctricas ha sostenido el Alto Tribunal:

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.

*“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará **probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima**”⁽⁵⁾(negritas del Despacho).*

Respecto a los daños derivados de redes eléctricas y de alto voltaje, la Corporación manifestó lo siguiente:

“En primer término, es preciso afirmar que cuando el Estado, en cumplimiento de sus deberes y fines constitucionales y legales de servir a la comunidad y promover la prosperidad general, construye una obra o presta un servicio público utilizando recursos o medios que por su propia naturaleza generan un peligro eventual o un riesgo excepcional para la vida, la integridad o los bienes de los asociados, está llamado a responder por los daños que se produzcan cuando dicho peligro o riesgo se realice, por cuanto de no hacerlo estaría imponiendo a las víctimas, en forma ilegítima, una carga que vulneraría el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas que están llamados a soportar todos los administrados, como contraprestación por los beneficios que les reporta la prestación de los servicios públicos.

En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una típica responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o culpa exclusiva y determinante de la víctima.”

En este contexto, ha explicado la Colegiatura, que al ser el título de riesgo excepcional uno de aquellos de naturaleza objetiva, no le basta a la entidad demandada probar que su actuar fue diligente y cuidadoso, con el fin de quebrantar las pretensiones formuladas, ya que en esos casos, el factor subjetivo no interviene en la imputación del hecho dañoso, circunstancia por la cual la única forma con que cuenta el extremo pasivo de la *litis* para liberarse de la imputación, es a partir de la demostración de una causa extraña en relación con el daño, esto es: i) que se produjo a causa de una fuerza mayor, o ii) por culpa exclusiva de la víctima, o iii) a consecuencia del hecho exclusivo y determinante de un tercero.

En punto al concepto de culpabilidad en la conducta de la víctima, ha dicho la Corporación, que en el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado, la valoración objetiva de la intervención causal tanto de la Administración como de la propia víctima, resultan suficientes para determinar si la causa eficiente del daño fue la actuación del ente demandado o de la víctima, sin que para ello importe si se omitió el deber objetivo de cuidado, por lo que resulta más preciso hablar del hecho de la víctima y no de su culpa.

Dicha causal de exoneración encuentra fundamento en la tranquilidad que tienen las personas que integran la sociedad, de que el Estado prestará adecuadamente sus servicios públicos, de forma que, no cualquier tipo de participación de la víctima, en una actividad riesgosa, reviste el estatus necesario para excluir la responsabilidad de la administración.

Respecto al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, la máxima Corporación de esta jurisdicción ha indicado, que éste se presenta cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder -activo u omisivo- de la propia víctima.

En palabras de la Corporación:

“(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (...).

Según el Alto Tribunal, lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima conduciría a estructurar una concausa y, por lo tanto, se debe reconocer una proporcionalidad en la materialización del daño y en su reparación.

Lo anterior significa que no toda conducta de la víctima tiene la suficiente dimensión o entidad para excluir o enervar la imputación frente al presunto responsable; el comportamiento de aquella para poder operar como causal exonerativa de responsabilidad debe ostentar una magnitud, de tal forma que sea evidente que su comportamiento fue el que influyó, de manera decisiva, en la generación del daño.

Sin embargo, ante la dificultad de determinar la relación causal de la víctima en los casos de daños causados por electrocución, el Consejo de Estado ha establecido algunas reglas simples, que contribuyen a definir, en los casos concretos, cuál es el sujeto a quien deba imputarse el daño, así:

“(i) Se ha considerado que el daño es imputable de manera exclusiva a la víctima cuando la actividad (conducción de energía eléctrica) se cumple dentro de las normas reglamentarias, cuyo fin no es otro que minimizar sus riesgos y es la víctima quien propicia la materialización de esos riesgos irreductibles, que no se habrían producido en condiciones normales. Así lo consideró la Sala, por ejemplo, al negar las pretensiones formuladas por los parientes de un trabajador que se electrocutó al hacer contacto con un transformador de energía en el momento en que pretendía atar unos cables de teléfono al poste que lo sostenía

6; también fue ese el raciocinio frente a los daños sufridos por personas, que a pesar de tener entrenamiento previo en el manejo de la energía eléctrica, omiten toda precaución.

(ii) Cuando la entidad responsable de la actividad riesgosa omite el cumplimiento estricto de las normas reglamentarias adoptadas con el fin de reducir esos riesgos y éstos se materializan y causan daños a las personas, hay sin duda una responsabilidad patrimonial de la entidad, inclusive, cabe predicar esa responsabilidad frente a eventos fortuitos, es decir, ajenos a una falla pero inherentes a la propia actividad. No obstante, habrá lugar a reducir el valor de la indemnización cuando la víctima con su actuación se expuso a dicho riesgo.

*(iii) No son, por lo tanto, imputables a la víctima, de manera exclusiva ni concurrente, los daños que se producen como consecuencia de la actividad riesgosa, bien que constituyan un caso fortuito o respondan a una falla del servicio y la intervención de la víctima sea meramente pasiva. No podrá reprocharse a la víctima una actuación que corresponda al desarrollo normal de su vida, cuando esa actuación permitió la materialización de un riesgo que no tenía por qué existir. Han sido solucionados de esa manera, por ejemplo, **todos aquellos eventos de daños por electrocución producidos al manipular un objeto metálico en un sitio en el cual no debía haber ningún riesgo, pero que produjo un daño como consecuencia de la indebida ubicación de redes eléctricas.**”²*

Negrillas fuera de texto.

FUNDAMENTOS DE HECHO.

En el caso concreto se tiene conforme al título de imputación excepcional explicado en precedencia claro resulta que EMCALI EICE ESP, con su actuar NO fue diligente y cuidadoso, pues por errores en el manejo operativo de la instalación, condujeron a que la menor Briana Sofia, una vez tocara la lámina que bajaba por el poste, la cual estaba expuesta para que cualquier ciudadano la tocará; debiendo la menor asumir un riesgo que no estaba en la obligación de asumir, esto teniendo en cuenta que la entidad demandada creó un riesgo desde todo punto de vista imputable a ella, esto teniendo en cuenta que tal instalación se hizo de manera

² CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, sentencia del diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009), Radicación número: 25000-23-26-000-1994-09783-01(17957), Actor: DORA ISABEL PINZON DE TRIANA Y OTROS.

defectuosa, dejando expuesto una lámina que conducía energía y como se reitera creando un riesgo para todo aquel que pasara por dicho lugar sin ningún tipo de advertencia o malla que aislara dicha resistencia.

Con las pruebas aportadas y las que se desarrollaran a lo largo del proceso quedará suficientemente probada la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa.

En el presente caso no hay forma que la administración en este caso EMCALI EICE ESP, pueda liberarse de la imputación, alegando una causa extraña en relación con el daño, esto es: la fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima, o del hecho exclusivo y determinante de un tercero.

Lo anterior teniendo en consideración que teniendo la obligación de eliminar cualquier elemento de riesgo para la población justo lo que sucedió fue lo contrario con su actuar en el mal manejo de la instalación que llegaba al poste objeto de descarga, dejando un riesgo de tal índole que las consecuencias hubieran podido ser peores a las ya sabidas, y que al final solo con el suceso fue que finalmente erradicaron una vez se llamo por parte de la Policía Nacional y de quienes intervinieron en tal evento.

CAPITULO III

PRUEBAS

PRUEBAS DOCUMENTALES:

Me permito adjuntar a la presente solicitud, los siguientes documentos:

- 1.- Poder para actuar,
- 2.- Copia Historia Clínica Historia Clínica Hospital Universitario del Valle – Hospital Carlos Holmes Trujillo – Centro de Salud el Diamante.
- 3.- Registro civil de nacimiento de Brianna Sofía Monterroza Zapata.
- 4.- Documentos identidad **VICTOR EDUARDO MONTERROZA VERDECIA y ANGELA MARIA ZAPATA ZAPATA.**
5. Videos del carro de Emcali realizando las reparaciones.
6. Acta de no acuerdo ante la Procuraduría.
7. Petición realizada ante EMCALI EICE E.S.P., de 29 de junio radicado No 100101742023.

DOCUMENTALES SOLICITADAS.

Con todo respeto sírvase señor Juez una vez llegue la respuesta a la petición radicada ante EMCALI EICE E.S.P., de 29 de junio radicado No 100101742023, agregarla al expediente o en su defecto si no la aportan oficiar para que remitan la respectiva respuesta a la referida petición.

PRUEBAS TESTIMONIALES.

En aplicación a lo establecido en el artículo 213 del CGP, solicito Llamar a declarar a los señores:

ROGER RÍOS, Cedula 16.321.884 y Fausuly Ríos, identificada con cedula No.31.858.183: correo electrónico Notcarolinazapatabeltran@gmail.com.

Los mismos declararan sobre los aspectos de la presente demanda.

DECLARACION DE PARTE:

Sírvase señor Juez citar a los señores **VICTOR EDUARDO MONTERROZA VERDECIA y ANGELA MARIA ZAPATA ZAPATA**, para que absuelva la declaración de parte que formule como apoderado de la parte demandante en los términos dispuestos en la ley procesal general.

CAPÍTULO V.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA:

Al tenor del artículo 157, incisos 1 y 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cuantía para el caso que nos ocupa está determinada por el valor de la mayor pretensión sin tener en cuenta los perjuicios morales, por la demandante, correspondiendo a la suma de CUARENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (40 SMMMLV.).

CAPITULO VI. COMPETENCIA.

Por el factor territorial y la cuantía, el trámite de este Medio de Control corresponde en Primera Instancia al Juzgado Administrativo del Circuito de Cali, según lo establecido en los artículos 155, Numeral 6°, 156, numeral 6°, y 157, inciso cuarto Ley 1437 de 2011.

CAPITULO VII. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

En cumplimiento a las disposiciones previstas en la ley 640 de 2001 y 1285 de 2009 sobre la obligatoriedad de agotar la conciliación prejudicial en materia administrativa, esta etapa se agotó el día 22 de marzo de 2023, ante la **PROCURADURÍA 166 JUDICIAL II DELEGADA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE CALI - VALLE**, la cual se anexa a la demanda.

CAPÍTULO VIII MEDIO DE CONTROL

El Medio de Control incoado es de Reparación directa, establecido en el artículo 155 del Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.

CAPITULO IX.

Me permito adjuntar a la presente solicitud, los siguientes documentos:

- 1.- Poder para actuar,
- 2.- Copia Historia Clínica Historia Clínica Hospital Universitario del Valle – Hospital Carlos Holmes Trujillo – Centro de Salud el Diamante.
- 3.- Registro civil de nacimiento de Brianna Sofía Monterroza Zapata.
- 4.- Documentos identidad **VICTOR EDUARDO MONTERROZA VERDECIA y ANGELA MARIA ZAPATA ZAPATA**,
5. Videos del carro de Emcali realizando las reparaciones.

I. **NOTIFICACIONES**

CONVOCADA: Complejo CAM Torre Emcali.

Correo Electrónico: notificaciones@emcali.com.co

APODERADA: Para efectos de notificaciones el correo de la apoderada es:
Notcarolinazapatabeltran@gmail.com.

DEMANDANTES: angelazapata1602@gmail.com y Victorinnx7@gmail.com

Atentamente,



CAROLINA ZAPATA BELTRAN
C.C 1.130.588.229 de Cali - Valle
T.P.236.047 C.S de la J.